

Murcia y Albacete

El voto del campo

JUAN OLIVER

CHO diputados y cuatro senadores han de elegir los murcianos entre unas opciones electorales similares a otras provincias con hegemonía actividad agrícola sin ser las características provincias del subdesarrollo que todos los augurios quieren otorgar a Alianza Popular (AP). En las comunidades donde no había una militancia política y tradición de oposición con previsiones parlamentarias, la política del presidente Suárez ha arraigado en pocos días y se perfila como ganadora.

La lista murciana de AP cuenta con nombres calificados de grises, entre ellos Gaspar de la Peña, ex presidente de la Diputación. Su incidencia en los pueblos agrícolas es una incógnita. La Unión de Centro Democrático (UCD) está integrada por hombres de Suárez, que se sitúan en cabeza, y representación del Partido Demócrata, con militantes próximos a Garrigues, y personas consideradas como desplazadas del Partido Popular. Ricardo de la Cierva va como independiente al Senado, con la representación de la hegemonía caciquil que ha ejercido su familia en la provincia aun viviendo en Madrid. También ha habido una baja de AP que ha entrado en las filas de UCD, el secretario del Gobierno Civil, Joaquín Esteban Monpean.

La Federación de la Democracia Cristiana (FDC) y el PSOE mantienen cordiales relaciones, frenando en la candidatura al Senado cualquier intervención del PCE. Ciria de Vicente encabeza la lista del PSOE, formación política que no tiene una especial tradición murciana. La presencia del inspector de Trabajo, ex delegado de Trabajo de Alicante, ofrece más posibilidades. La Unidad Socialista también ha traído escisiones por parte del Partido Socialista de la Región Murciana (PSM), cuya ejecutiva ha pasado en bloque al PSOE, por oposición a esta coalición con el PSP. Felipe González junto con Tierno Galván y Carrillo han sido los tres líderes de la izquierda que han visitado Murcia. El líder comunista obtuvo un aforo cercano a los veinticinco mil oyentes. El PCE tiene marcada acogida en el campo y medios profesionales. Salvador Madrid (licenciado en Económicas por la Sorbona, hombre muy vinculado al mundo agrario), Agustín Sánchez y Pedro Marsat (catedrático de Historia de la Medicina) son los tres nombres de cabecera, que junto con el independiente Francisco Cuervo (ex sacerdote, mendigo de la paz) en el Senado, ofrecen una alternativa popular.

La poca popularidad de AP posiblemente podrá comprobarse en los resultados electorales que

ofrezca Albacete, pues el voto del campo manchego está tendiendo hacia el centro y el centro izquierda, al menos durante la campaña. Cuatro diputados y cuatro senadores serán elegidos por doscientos mil votantes, cantidad que se verá disminuida por el alto número de emigrantes en Suiza que no podrán ejercer su derecho de voto por las normas del Gobierno de este país. "Albacete no es una provincia de Alianza Popular", escribía un periodista en Albacete, al reseñar la lucha entre funcionarios y caciques surgidos de las últimas décadas, cuyo resultado es la derrota de los primeros. Antonio Gómez Picazo, ex director general de Administración Local, albaceteño, y ex presidente de la Diputación, es el hombre fuerte de la alianza. Por el Senado van dos antiguos cargos locales, mientras un tercero se retiró. Los derrotados han pasado al UCD que no rehúye hablar de Suárez insistentemente. El abogado del Estado, Francisco Ruiz Risueño, se estrena en política, acompañado por el ex delegado de Sindicatos de Murcia, José Luis Moreno, caracterizado por su apertura a las centrales sindicales y ambición de promover un partido Socialdemócrata Manchego.

A la derecha de AP y UCD, Falange Española comparece en Albacete con un hombre que votó no a la reforma y otras cosas. Ricardo Fernández Gutiérrez, director de la Caja Rural, se ha caracterizado por un extenso proselitismo político en los pueblos albaceteños que dependen de esta entidad bancaria.

La Democracia Cristiana, junto con el PSP y los independientes, ha promovido una candidatura de centro izquierda para dirigirse a un electorado de clase media cualificada y profesionales liberales, con mentalidad próxima al socialismo. El grupo Alianza Democrática Albacetense (ADA) ha supuesto el origen de esta coalición, que cuenta con la cabecera del hombre del PSP, José Bono. El PSOE en solitario está apoyado por una gran campaña publicitaria. Su lista no tiene nombres relevantes, exceptuando el aparejador Antonio Peinado. El PCE posee un núcleo rural muy importante, Villamalea, cuyo antiguo presidente de la Cooperativa, Enrique López Carrasco (miembro de la ejecutiva nacional) encabeza su lista. En las negociaciones de un Senado unitario, el centro izquierda marginó al PCE, así como también lo hizo el PSOE. De esta forma, los apoyos aparecen fraccionados, aunque el PCE en su presentación pública ha expresado su simpatía a los nombres del PSP, DC e independientes. ■

Baleares

Compromiso autonómico en los programas

CAMILO J. CELA CONDE

MAGINO que referirse a la situación preelectoral de Baleares en términos de confusión y apresuramiento, no es sino seguir los tópicos que vienen demostrando las flaquezas de unas elecciones en las que la improvisación parece ser la virtud predominante.

Pero el problema de estas islas es mayor que el que refleja la media estadística estatal. Porque eso de las Baleares suena muy bien como concepto geográfico, pero, sencillamente, no existe en el terreno de la política y la sociedad. Hay una serie de islas agotadas por la imposición de categorías centralistas (a nivel "provincial") hábilmente manejadas para sofocar todo intento de rescate de sus respectivas personalidades, que de repente tienen que arreglar a marchas forzadas los problemas que durante tanto tiempo se mantuvieron en el campo del tabú. Si al final de la dictadura, cuando la oposición española empezó a organizarse en las inefables "instancias unitarias", las islas Baleares dieron ejemplo de desunión sistemática, no se debió a infantilismo político, ni falta de madurez cívica, ni ganas de marear. Estaba saliendo a la luz la realidad de cuatro islas separadas por el mar, por la Historia, por la economía y por la unión forzada que de tanto sirvió al franquismo (si se me permite, una vez más, acudir al tópico para hacer una síntesis rápida del asunto).

Incluso las instituciones franquistas han tenido que aceptar el hecho de que las Baleares no son una provincia cualquiera. El concepto de provincia ha sido roto al concederse específicamente un senador a las islas menores (uno a Menorca y otro a Ibiza-Formentera). Pero es sólo un síntoma mínimo que va a resultar insuficiente para las aspiraciones de los isleños. Aun cuando en las listas para el Congreso de los distintos partidos figuren menorquines e ibicencos, se encuentran a título de apoyo moral y en unos lugares que no dan acceso a la Cámara. Las listas electorales específicamente menorquinas ("Menorca problemática insular y autonomía" —sic—) e ibicencas ("Movimiento autonomista pitiuso") no presentan candidatos al Congreso.

Por supuesto que no es el de la diferencia interinsular el único problema planteado, pero interfiere de forma considerable en casi todos ellos. Y muy concretamente en el que puede ser considerado como la clave del futuro de las islas Baleares: la autonomía.

La postura de los partidos políticos que se presentan a las elecciones en las Baleares, en lo que se refiere a la autonomía, es —por lo menos de una manera formal— casi unánime: hay que conseguir un estatuto para las islas. Las diferencias aparecen en el procedimiento y bases del pretendido estatuto, y aun cuando está pendiente mientras esto se escribe la firma de un "compromiso para la autonomía"

por parte de la mayoría de los partidos —con la probable excepción de Alianza Popular y Fuerza Nueva—, el hecho de que existan grupos específicamente identificados con el problema autonómico complica las cosas. La Unió Autonomista, grupo que se denomina de centro-izquierda y que encabeza Josep Meliá (una persona ligada ideológicamente al presidente Suárez), juega incluso en su nombre con la baza autonomista como carta fuerte, y no está dispuesto a dejar esa bandera tras la firma del compromiso. El PSOE, por su parte, rechaza la existencia de monopolios sobre el nombre de Mallorca o la cuestión de la autonomía.

Otros problemas, quizá más inmediatos, asoman en el horizonte como síntomas del deterioro económico y social de las Baleares. El asunto de la huelga en la hostelería obliga a recordar la difícil situación que atraviesa el sector turístico, con unos empresarios descapitalizados y dependientes de los "tour-operators" extranjeros y unos trabajadores que han sufrido en muchas ocasiones las consecuencias de un capitalismo salvaje, acosados por el paro y nada dispuestos a seguir en condiciones de sobreexplotación. Raro es el partido político que no denuncia (desde distintos puntos de vista, desde luego) la ruina del negocio turístico, pero apenas se pasa de las lamentaciones. Vagamente aparece otra vez la autonomía como solución a los problemas, aun cuando no acaba de explicarse de qué manera.

Así, las cuestiones políticas, económicas y culturales (la cooficialidad del catalán, la enseñanza en lengua vernácula, el propio nombre del archipiélago) figuran como horizontes de referencia más o menos lejanos, o como tópicos por los que hay que pasar. Algunos grupos, como Alianza Popular o la Unión del Centro Democrático, procuran definirse lo menos posible respecto a temas polémicos. Otros mantienen posturas claramente comprometidas, pero a nivel de formulación teórica de principios. Estas elecciones no hacen referencia alguna a gestión y administración pública, sino a principios políticos de tajante alternativa generalmente ya resueltos en los sitios en que la democracia formal es una tradición.

Quizá el dato más importante sea el de que los sondeos de opinión reflejan una tendencia a la distribución de votos muy similar a la del resto del país. De confirmarse esa línea, las islas Baleares habrían dejado de ser el feudo reaccionario tradicional, y expresarían políticamente los cambios sociológicos que han sufrido. Poco más. La falta de programas relativos al tratamiento empírico de los problemas reduce la consulta electoral en las Baleares a una expresión de fe ideológica. La próxima vez, ya veremos. ■